



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

La Plata, 13 de junio de 2024.

**VISTO:** este expediente FLP 16688/2023/CA1, caratulado: "ZUHANG LIQIANG s/ INFRACCIÓN LEY 27.430", proveniente del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Penal N° 5;

**Y CONSIDERANDO QUE:**

**I. Antecedentes.**

1. Se inicia la presente causa a partir de la denuncia efectuada por la doctora Diana Pamela Turnes, en su calidad de Jefe Interina de la Sección Penal "A" del Departamento de Coordinación Penal, dependiente de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos, contra Zuhang Liquiang, por la presunta comisión del delito de evasión simple de los recursos de la seguridad social, previsto en el art. 5 del Régimen Penal Tributario, artículo 279 de la ley 27.430.

Dicha denuncia fue originada a partir de un relevamiento realizado por personal del organismo recaudador en el domicilio fiscal del contribuyente, arrojando éste distintas irregularidades según la denunciante, tales como trabajadores sin declarar, trabajadores sin alta y trabajadores que declaran percibir sus remuneraciones sin recibo.

A consecuencia de ello, y a efectos de verificar la situación del contribuyente respecto de los períodos 10/2021 a 06/2022, se dio origen a la Orden de Intervención N° 2.064.655, a cargo de la División de Fiscalización N° 2 de los Recursos de la Seguridad Social. Tal diligencia, reveló una supuesta evasión de los recursos de la seguridad social respecto del período 6/2022,



ascendiendo la suma del monto evadido a \$254.856,19, lo que motivó la denuncia contra el imputado de autos.

2. Corrida la vista del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación y delegada la instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso distintas diligencias y solicitó que se cite a Zhuang Liqiang a prestar declaración a tenor de lo establecido por el artículo 294 del CPPN.

Con fecha 12 de octubre de 2023, se llevó adelante la indagatoria, en la que el imputado eligió hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.

## **II. La decisión recurrida y los agravios.**

1. Con los elementos recolectados y a petición del fiscal de primera instancia, el *a quo* resolvió dictar el procesamiento -sin prisión preventiva- de Zhuang Liqiang en orden al delito de evasión simple de los recursos de la seguridad social (art. 5 del Régimen Penal Tributario).

2. Contra este decisorio, la defensa del encartado interpuso recurso de apelación el cual fuera concedido y diera lugar a la intervención de esta Sala.

En lo sustancial, el recurrente manifestó que el monto mínimo establecido en el artículo 5 del Régimen Penal Tributario sería inconstitucional por contrariar el principio de razonabilidad reconocido en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional. Afirmó que desde la entrada en vigencia de la ley en el 2017, a la fecha de interposición del recurso que aquí se analiza, hubo (según el recurrente y sus fuentes citadas) un 813.36% de inflación, por lo que no existiría coherencia con el monto mínimo que





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

exige el tipo penal objetivo, y lo que representa actualmente ese valor impuesto por el legislador.

Por otra parte, afirmó que de la resolución impugnada no surge cual sería el medio comisivo que habría empleado su defendido para evadir el pago de las cargas sociales.

Sostuvo que tal omisión es violatoria del derecho de defensa, toda vez que no es posible realizar un descargo si el magistrado no describió oportunamente la acción reprochada, razón por la que solicitó que se declare la nulidad de la resolución atacada.

Manifestó también que su asistido efectuó el pago total del monto adeudado, razón por la que no existiría lesión alguna al bien jurídico tutelado y que deberían "seguirse los lineamientos del artículo 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal". Mencionó que el 13 de noviembre de 2023 su defendido abonó a la A.F.I.P. la suma de \$254.856,19, y con fecha 17 de noviembre del mismo año abonó la suma de \$283.683,60 en concepto de intereses, y adjuntó a tal fin los distintos comprobantes de pago.

3. Radicados los autos en esta Sala, y corrida la vista al Fiscal General en los términos del artículo 453 del C.P.P.N., este no adhirió al recurso de apelación interpuesto. Manifestó que el auto de mérito recurrido se encuentra debidamente fundado y se sustenta en las constancias del expediente. Consideró que los agravios sostenidos por la defensa en su recurso de apelación deben ser desestimados.

En relación al planteo de inconstitucionalidad del artículo 5 del Régimen Penal Tributario, afirmó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de extrema



gravedad institucional reservado solo para casos excepcionales y citó jurisprudencia de la Corte Suprema en ese sentido.

Respecto al cuestionamiento del recurrente por la supuesta ausencia de medios comisivos sostuvo, en breve síntesis, que dicho planteo carece de asidero y no se corresponde con las constancias del caso.

Por último, en cuanto al pago del monto adeudado y la pretendida extinción de la acción penal por parte del recurrente, manifestó que tampoco debe prosperar. Afirmó que el Régimen Penal Tributario, como materia especial, prevé su propia normativa que establece mecanismos determinados para extinguir la acción penal por pago, y que no estarían reunidos en el caso bajo análisis.

4. En el marco de la audiencia de artículo 454 del C.P.P.N, la parte querellante, por su lado, también sostuvo que la resolución apelada se encuentra debidamente fundada y sustentada en las constancias de autos.

Con respecto al planteo de inconstitucionalidad, adhirió a los fundamentos expuestos por el Fiscal General.

En relación a la supuesta falta de identificación de los medios comisivos que el tipo penal exige, afirmó que tal agravio es desacertado y carece de fundamentos.

Por último, con respecto al pago integral del monto adeudado y la extinción de la acción, sostuvo -coincidiendo nuevamente con el dictamen fiscal- que el Régimen Penal Tributario, como régimen especial prevé su propia norma a tales fines, con sus propias exigencias y que en el caso de autos, no estarían satisfechas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

La defensa, por su parte, reeditó los argumentos expuestos en el recurso de apelación y solicitó, por entender que se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 16 del Régimen Penal Tributario, que se declare extinta la acción penal.

**III. Consideración de los agravios.**

**1. Cuestiones liminares.**

a. Del análisis de la decisión atacada y de las actuaciones tenidas a la vista, no se desprende que para decidir, el a quo haya hecho una descripción de los hechos imprecisa o inexacta en relación a la manera en que se llevó adelante la acción que se imputa. Por el contrario, mencionó de manera clara cuál fue el modo en que se desplegó la conducta que se imputa.

Concretamente, surge de la resolución puesta en crisis que el imputado presentó declaraciones juradas que no resultaban acordes a su realidad. Situación que, además, solo pudo ser comprobada de llevarse a cabo el relevamiento que la A.F.I.P realizó en el domicilio fiscal del contribuyente. Es claro, al menos con el grado de certeza que este estadio procesal exige, que la conducta reprochada se condice tanto con las ocultaciones maliciosas, como con las declaraciones engañosas que exige el tipo penal en cuestión.

Por ello, la nulidad pretendida se presenta en realidad como una mera discrepancia de valoraciones. Es decir, en la resolución que se cuestiona se realiza una descripción concreta, con la precisión necesaria, de los hechos que se atribuyen al imputado en autos.

Razón por la cual, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado (arts. 123 y 308 C.P.P.N.).



**b.** El planteo de inconstitucionalidad tampoco habrá de prosperar.

Por un lado, debe recordarse que declarar la invalidez de una ley del congreso por ser contraria a la inteligencia del texto constitucional es un acto de extrema gravedad institucional, reservado solo para cuestiones excepcionales (Fallos: 249:51; 264:364; 288:325; 328:1416, entre muchos otros).

A la vez, si bien el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país es notorio y no escapa al conocimiento de este Tribunal, ello no autoriza declarar la inconstitucionalidad del monto objetivo de punibilidad mínimo previsto en el artículo 5° del Régimen Penal Tributario toda vez que es el Congreso de la Nación quien tiene la atribución constitucional específica de declarar la criminalidad de los actos y de establecer las sanciones penales (arts. 18 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).

Al respecto, "es menester tener presente que el mérito, conveniencia o acierto de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse (Fallos: 324:3345; 328:91 y 329:4032). Solo casos que trasciendan ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces (Fallos: 313:410; 318:1256 y 329:385, entre muchos otros)" (Fallos: 346:407).

Este tipo de decisiones respecto de la política criminal de modificar los montos objetivos de punibilidad corresponde por mandato constitucional al legislador, y no puede suponerse que estemos frente una falta de previsión, o que desconozca las implicancias de la inflación en este aspecto. Si bien la falta de





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

actualización de los montos es una problemática que podría analizar el Poder Legislativo, ello no conduce a la inconstitucionalidad pretendida por la defensa.

#### **2. Cuestión de fondo.**

Despejadas las aludidas cuestiones de orden preliminar, se adelanta que a juicio del Tribunal el pronunciamiento apelado resulta prematuro y debe ser revocado.

Se le atribuye al encartado la conducta tipificada en el art. 5° de la ley 27.430 -Régimen Penal Tributario-.

Concretamente, la norma prevé sanción para "el obligado que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000) por cada mes".

A la vez, el art. 16 del mismo régimen establece -entre otras cosas- que en "los casos previstos en los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6° la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula".



Frente a ello, teniendo en cuenta la documentación colectada y la controversia que se ha planteado en torno al aludido beneficio (cfr. fs. 37/39, fs. 44, fs. 45/48, fs. 49/52, fs. 53/58) corresponde dictar la falta de mérito en los términos del artículo 309 del C.P.P.N, debiendo el a quo llevar adelante las medidas que considere conducentes a efectos de establecer si se encuentran satisfechas las exigencias previstas en el art. 16 del Régimen Penal Tributario.

Cabe recordar a esta altura que la falta de mérito es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo (art. 334 del Código Procesal Penal de la Nación) y el procesamiento (art. 306 del mismo Cuerpo). Se trata de una resolución sobre el mérito inicial de la imputación que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de su inexistencia y que, por tanto, no es conclusiva del proceso. Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter de delictuoso o la responsabilidad del imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento (art. 336, inc. 2, 3 y 4)- el juez debe disponer la falta de mérito. Sin embargo, cuando luego de su dictado no progresó la pesquisa para autorizar el procesamiento, corresponde sobreseer (véase, D'Albora, Francisco J., *Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado*, sexta edición, Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot. 2003, tomo II, p. 641).

Por ello, **SE RESUELVE: REVOCAR** la resolución apelada en cuanto dispone el procesamiento de







Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

Zhuang Liqiang, y **DISPONER** la **FALTA DE MÉRITO** a su respecto, debiendo el *a quo* proceder con arreglo a las consideraciones efectuadas precedentemente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS ALBERTO VALLEFIN  
JUEZ

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS  
JUEZ

Ante mí;

MARIA ALEJANDRA MARTIN  
SECRETARIA FEDERAL

Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo, *in fine* del CPPN (art. 109, RJN).

MARIA ALEJANDRA MARTIN  
SECRETARIA FEDERAL

